

ESPAÑA EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Gregorio PECES-BARBA

EL tema que yo voy a abordar en esta conferencia, pretende situar el tema de España, que ha sido el objeto de este ciclo en el marco de la Constitución pero necesito una primera parte para poder explicar y que se entienda bien cuál fue el esfuerzo y el intento que hicimos en aquel momento, en el año 1977, el señalar algunos antecedentes que marcaron mucho lo que nosotros tuvimos que hacer.

Prescindiendo de otras dimensiones medievales, por ejemplo aquellos que os interesa y alguna cosa se ha dicho –lo ha dicho el profesor Alvar el otro día–, en el libro espléndido del profesor José Antonio Maravall sobre la idea de España en la Edad Media, pero prescindiendo de esos antecedentes, de esa España en la que coexistían las tres culturas, que era una España tolerante, la cultura judía, la musulmana y la cristiana, cuando se aborda el tema de España en el mundo moderno, la idea de España desde los Reyes Católicos en adelante, se vincula a la idea de la unidad de España, a la idea de la unidad de la fe. Y España es desde ese momento lo que Fernando de los Ríos llama un estado-iglesia, de tal forma que ser español, desde el punto de vista de lo que supone el concepto de una nación, tal como lo conciben la sociología política a partir de finales del XIX, que considera que las naciones son aquellas realidades en las que los hombres se agrupan por razones culturales, razones lingüísticas, sentimientos comunes, esperanzas o frustraciones comunes. Esa idea, desde el origen, aparece vinculada a la idea de la unidad de la fe.

Esa circunstancia producirá que ya en el propio siglo XV se produce la expulsión de los judíos y a principios del siglo XVII la expulsión de los moriscos porque no eran coherentes con esa idea que suponía excluir de la idea de

España y de la convivencia española a todos los heterodoxos situados como colectivos que no participasen de esa idea de España vinculada a la unidad de la fe y también en muchos momentos a la pureza de la sangre y eso explica que, junto a los judíos y a los moriscos, se produce una persecución e incluso dentro de sectores que podríamos llamar heterodoxos dentro de la Iglesia Católica, como son los erasmistas que tienen una gran influencia a lo largo del siglo XVI, incluso algunos de los obispos y cardenales se pueden situar en esa época en el erasmismo, pero que son perseguidos por la Inquisición que se crea o se impulsa y que se le da un sentido nuevo en el siglo XV. Hay un libro también que os recomiendo que se llama «Erasmus en España» de un gran hispanista francés que es Marcel Batallaun que es un libro donde se pone de relieve la enorme influencia que tuvieron los erasmistas como cristianos abiertos, tolerantes, que de alguna manera anunciaban lo que iba a ser después el cristianismo en algunos otros sectores heterodoxos.

Ocurre lo mismo con los protestantes. España es probablemente de los pocos países de la Europa Occidental donde no existe un movimiento protestante serio. Porque el protestantismo surge en España, como en los restantes países, de sectores eclesiásticos: monjes, religiosos, sacerdotes, que se pasan a las nuevas versiones pero que son inmediatamente perseguidos. Como ejemplo os diré que a mediados del siglo XVI, Cipriano de Valera, que es una de esas personas que ha sido religioso andaluz y que se pasa al protestantismo traduce al castellano «La institución de la religión cristiana» de Calvino y naturalmente no la puede publicar en España, se tiene que publicar en Holanda. Y él en el prólogo se refiere a «los súbditos de la nación –todavía lo escribe con z en aquellos tiempos– católica y de la nación cristiana, sea –dice– que a un giman so el yugo de la Inquisición o que estén fuera de España». Ese es un poco el destino de los heterodoxos en relación con esa idea de España, una heterodoxia que, o está perseguida por la Inquisición o está en el exilio. Fijaros que todavía, porque eso se va prolongando en el tiempo con algún oasis que es el oasis de algunos años de la Ilustración –Carlos III– se producen incluso acciones habituales en aquel siglo XVIII como la expulsión de los jesuitas. Pero, salvo algunos periodos en el siglo XVIII y algunos muy breves en el siglo XIX, la situación permanece hasta muy entrado el siglo XX, hasta casi podríamos decir el año 1931.

Durante todo ese tiempo, por ejemplo otro protestante, un cuáquero, que pretende reproducir la traducción –Luis de Usoza Río– que había hecho Cipriano de Valera, tampoco lo puede hacer a mediados del siglo XIX porque en 1851 se había producido un nuevo concordato con la Santa Sede donde se obligaba a los profesores, por ejemplo, a proclamar su lealtad y su sumisión a los dogmas de la Iglesia Católica y también eso prolongará un poco esa situación a la que me estoy refiriendo.

La situación, para que os hagáis una idea de esa situación de persecución de los heterodoxos individuales, de los heterodoxos de conciencia. A lo largo del siglo XIX hay dos salidas importantes de profesores de la universidad que

se van porque no quieren jurar lealtad a la Iglesia Católica ni someterse a sus dogmas. Y es curioso porque hay también un elemento que se puede vincular a todo eso que es el destino del liberalismo español. Por poner una figura, Alcalá-Galiano es uno de los grandes liberales del siglo XIX que, a principios de siglo, durante la Constitución de Cádiz hasta el trienio liberal (1820-1823) es un hombre que está en una posición radical, muy liberal, defendiendo posiciones muy abiertas y que poco a poco va evolucionando hasta convertirse en un moderado y en 1865, el mismo año de su muerte, siendo ministro de Fomento, dirige la represión contra los profesores después de una famosa noche donde se produce una revuelta estudiantil –la famosa noche de San Daniel– y ahí salen ya una serie de profesores como Francisco Giner de los Ríos y otros y más tarde saldrá otro grupo de profesores: Salmerón, Castelar, etc. de la universidad y ese será el origen de la Institución Libre de Enseñanza. Pero bien, junto a esta situación de persecución de los heterodoxos que se prolonga hasta el siglo XX –dos ejemplos más para confirmarlo– se producirá también una persecución de colectivos que no comparten absolutamente esa idea de España que se había producido a partir de los Reyes Católicos.

Dos ejemplos más. En 1897, hace apenas un siglo, uno de los grandes maestros del Derecho, el fundador moderno del Derecho Penal, don Pedro Dorado Montero, catedrático de Salamanca, es denunciado por 11 estudiantes de derecho por «explicar en las aulas –según dicen en la denuncia, dirigida al obispo de Salamanca– doctrinas positivistas y materialistas». La denuncia es transmitida al ministro de Fomento y es suspendido de su docencia. Es un gobierno Cánovas del Castillo. La muerte de éste el año 1898, asesinado en el Balneario de Santa Águeda, como sabéis, produce que caiga el gobierno, que cambie la situación y que sea restablecido en su cátedra. Pero fijaros en el hecho de que son razones vinculadas al dogma católico las que producen su salida. Y por fin un último ejemplo, de los años veinte de este siglo. Siendo inspector de enseñanza primaria en la provincia de Granada, Fernando Sainz, que era un liberal muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, padre del recientemente fallecido don Fernando Sainz de Bujanda, el gran maestro del Derecho Financiero, este hombre que es inspector de enseñanza primaria, se niega a que en Granada se suspendan las clases un día, como le pedían las autoridades eclesiásticas, porque entraba el señor arzobispo que había sido convertido en cardenal. Él se niega y entonces es suspendido de su condición y cesado como inspector de enseñanza primaria. Esto os da una idea de una de las dimensiones importantes con la que nos encontramos al llegar a la Constitución en relación con la cual después hablaremos.

Pero hay una segunda dimensión a tener en cuenta que es ya muy vinculada con los esfuerzos centralizadores de los Austrias. Primero, es decir con el esfuerzo que hace el conde-duque de Olivares para producir una centralización de España y someter a aquellas zonas del país que tenían una cultura distinta –estoy pensando fundamentalmente en Cataluña–. Como sabéis, ahora por

ejemplo el panorama de nuestro país podría ser distinto. Por ejemplo, España podría tener a Portugal como parte de España y a Cataluña fuera como es hoy Portugal porque llegó un momento en una de esas situaciones en el siglo XVII en que España no tenía la posibilidad de sofocar una de las dos rebeliones que existían que era la portuguesa o la catalana y decidió sofocar la catalana y abandonar a su suerte a Portugal que es por eso independiente. Mientras se sofocó el levantamiento de los catalanes y esa situación de tensión se reforzó con la Guerra de Sucesión Española, cuando se produjo la adhesión de Cataluña y de algunas otras zonas como Valencia a los Asburgo, mientras que triunfó al final Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV como sabéis, se produce la supresión con los decretos de nueva planta de las libertades propias de esos países y arrastramos también esa segunda persecución de los heterodoxos. Problema que se agrava en relación con el País Vasco en el siglo XIX con las Guerras Carlistas. Estas guerras producirán también una supresión de los fueros y unos planteamientos centralizadores a lo largo de todo el siglo XIX que se consolidarán definitivamente con la Constitución de 1876 que es una constitución, no sólo moderada y conservadora, sino absolutamente centralista.

También coincide que hay unos colectivos que tienen unas condiciones que hemos llamado ahora «hechos diferenciales» y que son una idea nacional, nunca una idea de soberanía, pero una idea nacional en el sentido de una cultura propia, una lengua propia, unas esperanzas y frustraciones comunes, unos agravios y esos colectivos que no acaban, no es que estén absolutamente al margen de la idea de España, pero que no acaban de comulgar con algunas de las dimensiones de esa idea que se intenta imponer desde Castilla, cuando se producen graves crisis en nuestro país y en concreto en 1898, lo que en otras zonas supone una crisis que refuerza el espíritu español —como pueden ser todas las generaciones de principios del siglo XX si vosotros leéis a cualquiera de los autores de la generación del 14 donde está Ortega, Azaña o Fernando de los Ríos, veréis que eso refuerza una idea de España pero ya distinta de la que generan los Reyes Católicos—, pero en Cataluña o en el País Vasco en 1898 eso lo que hace es reforzar precisamente los elementos diferenciales.

El nacionalismo catalán más difuso se consolidará también con el romanticismo político y aparecerá a finales de siglo el nacionalismo vasco de la mano de Sabino Arana. Esas situaciones en las que no voy a entrar mucho: persecución de los heterodoxos individuales, persecución de las heterodoxias colectivas —de aquellos que no participan plenamente de la idea de España— se intentan resolver con la Constitución de 1931 que supone la caída de la monarquía después de todos los hechos que habían producido el apoyo del rey Alfonso XIII a la dictadura del general Primo de Rivera. La misma sanción que sufren los Saboya en Italia, más tarde en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial por su apoyo a Mussolini, sufre Alfonso XIII en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Entonces, en la República, cristalizará de alguna manera con libertad esos dos grandes problemas junto con otros, también el problema

social, la desgracia de que la República viene después de la crisis del 29, todo eso produce una gran inestabilidad, pero me voy a referir solamente a estos dos problemas vinculados con la misma idea de España.

La Constitución Republicana define a España como un estado «integral» en el sentido de indisoluble o inseparable pero recogiendo, intentando resolver, el tema de las autonomías. Y lo hace haciendo compatible el estado integral y la idea de España con unos estatutos de autonomía fundamentalmente pensados exclusivamente para las regiones con hechos diferenciales. Es decir, la Constitución del 31, aunque no cierra la posibilidad de que existan estatutos de autonomía para otras regiones, sin embargo, concibe la posibilidad y se establece en la Constitución la posibilidad de que puedan existir provincias vinculadas directamente al gobierno central, es decir, que no se produce una generalización de las autonomías.

Por otra parte, una de las frustraciones del tema que nos ocupa es que cuando se produce la proclamación del «estat catalá» en 1934, eso supone una ruptura de la legalidad republicana. Es decir, de la misma forma que hoy se producen algunos problemas en esa materia después de la Constitución de 1978, después de la de 1931, pese a un amplio estatuto de autonomía, se proclama por el propio gobierno de la Generalitat el estat catalá dentro de una federación de repúblicas ibéricas, es decir, rompiendo naturalmente el marco de la Constitución del 31. El levantamiento es sofocado por el general Batet con toda contundencia y se restablece la Constitución con una quiebra de la lealtad por parte de esos sectores a la Constitución de 1931.

Por otra parte, el problema de los heterodoxos individuales se intenta resolver con el reconocimiento de la libertad de conciencia y con la aceptación de todas las ideologías, pero permanecerá el problema religioso. Hay un sector de la Iglesia Católica, el más abierto, que encarnaría el cardenal Vidal y Barraquer que intenta un entendimiento con la Segunda República y, en concreto, con quien se ocupaba de esos temas que era el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos. Hay una correspondencia muy amistosa entre Fernando de los Ríos y el cardenal Vidal y Barraquer, que representaba ese sector más abierto de la Iglesia para buscar un «modus vivendi», un «estatus», a la convivencia de la religión. Pero todos esos siglos de hegemonía, de predominio, de prepotencia de la Iglesia Católica habían generado al mismo tiempo un muy profundo anticlericalismo. Un anticlericalismo que hace imposible ese «modus vivendi», porque, por un lado, el cardenal Vidal y Barraquer es desbordado por la mayoría de los obispos, es expulsado el cardenal Segura de España, es conducido por la policía y la guardia civil fuera de España por orden del gobierno provisional de la República, hay muchas tensiones y, por otra parte, del lado de los republicanos no es posible buscar una fórmula que fuera aceptable.

En concreto, el problema central que se produce es que en la Constitución no se acepta que la Iglesia sea una corporación de derecho público. No puedo entrar mucho en eso pero quiero decir que con esta situación tampoco

se arreglan mucho las cosas y cuando llega después, el 18 de julio, el levantamiento militar ya había habido antes unos atisbos de acción directa anticlerical durante la guerra —en la que se producen muchísimos asesinatos al margen del conflicto— se producen muchos asesinatos de sacerdotes y religiosos, ellos personalmente inocentes, aunque herederos de toda aquella historia, pero inocentes personalmente.

Después de esa situación donde después de la Guerra Civil la persecución a los heterodoxos ideológicos es total, más de un 60 por 100 de los profesores universitarios tienen que huir fuera de España, o son detenidos y fusilados la mayor parte de los rectores —dicho sea de paso entre ellos Leopoldo Alas, el hijo de Clarín, es fusilado— al igual que la mayor parte de los capitanes generales, también dicho sea de paso, que son leales al gobierno de la república y al acabar la guerra se produce la persecución, desde el punto de vista católico, a la masonería principalmente y ahí la sentencia que condena a Fernando de los Ríos por masón. Es una sentencia donde entre los hechos de los que se le acusa está el haber sido diputado y ministro. Son hechos probados que se declaran en la sentencia por haber sido y haber hecho una gran propaganda del socialismo.

Al mismo tiempo, la persecución a los heterodoxos, no solamente religiosos sino también ideológicos, les identifica con lo que se llama la anti-españa. Las palabras que se utilizan en los años 40 y 50, en la prensa, en los ideólogos del régimen franquista es referirse a la anti-españa y la anti-españa son fundamentalmente los grupos ideológicos que han sido más poderosos, que son fundamentalmente los socialistas y los anarquistas que han sido los más amplios y luego también, aunque menos numerosos muy activos, los comunistas. Persecución religiosa, persecución de los heterodoxos ideológicos y persecución de los heterodoxos de la idea de la España imperial. Lemas como «habla la lengua del imperio», por ejemplo, o la declaración de Guipúzcoa o Vizcaya como provincias traidoras en 1939 son hechos que están ahí.

¿Cuáles son las consecuencias de esto de cara a lo que vamos a hacer? y con esto ya llego a la Constitución. Las consecuencias son que se produce una exacerbación por ofensas producidas, tanto de los heterodoxos religiosos como sobre todo de los heterodoxos culturales, de las llamadas zonas con hechos diferenciales. Cuando llegamos en 1978, después de las elecciones del 15 de Junio que son elecciones que han acabado con los rasgos fundamentales del régimen franquista: se suprime el partido único, se suprime el sindicato único, se da la amnistía, se hace una ley para la reforma política que hace posible las elecciones del 15 de Junio de 1977, nos encontramos con una situación en la que había que resolver para reconstruir una idea de España en la que cupieran también los heterodoxos de todo tipo, hay que reconstruir una serie de elementos y de hilos respecto de los cuales existían elementos para su reconstrucción. Es decir, los heterodoxos políticos de las generaciones del 14 en adelante, como digo Ortega, Azaña, Fernando de los Ríos y toda la gente de la Institución Libre de Enseñanza, eran gente que tenían muy clara la idea de España,

se sentían muy patriotas españoles. Si ustedes leen alguno de los escritos o las memorias de Indalecio Prieto, por ejemplo, verán una exaltación de lo español, pero ya de lo español como cultura, como lengua, como costumbres, pero al margen de la vinculación entre las dimensiones de fe religiosa y las dimensiones estrictamente nacionales de configuración de una unidad. Por ejemplo, en ese libro que es tan bonito y que, como tienen ustedes aquí las obras completas de Fernando de los Ríos si no me equivoco porque yo se las mandé, pues pueden ver ese libro que se llama «Religión y Estado en la España del siglo XVI» donde hay un anhelo de reconstruir la España medieval, la España tolerante de las tres culturas y donde se describe con mucho dolor esa España que persigue a los heterodoxos, etc.

Es decir que desde el punto de vista ideológico, los partidos de izquierdas, socialistas y comunistas que se presentan a las elecciones del 15 de Junio, reivindican la idea de España, de su cultura, de su lengua pero en un choque con los sectores herederos del franquismo que siguen hablando, en relación con ellos, de la anti-españa. Para que se hagan una idea en los años 78 ó 79 es necesario en algunos momentos, por ejemplo, hacer una petición —una vez que se ha resuelto el tema de la bandera con la Constitución, de aceptación de la bandera bicolor— es necesario hacer llamadas, por parte de los socialistas y de los comunistas para que la gente en determinadas fechas coloque en sus balcones una bandera española para que quede claro que eso no es el monopolio de Fuerza Nueva ni de grupos extremistas de derechas. Muchos de ustedes no habían nacido o alguno de los presentes en que se hicieron esas demostraciones desde los partidos de izquierda y uno de los signos más representativos de esa aceptación de la idea de España, una idea por supuesto laica, es la primera reunión del Comité Central del Partido Comunista en libertad donde, como cuentan algunos de los asistentes, se encontraron sorprendidos cuando vieron colocada allí, de una manera muy central en la reunión, la bandera bicolor. Aún así, todavía hubo en ese tiempo tensiones pero que eran más políticas, que no tenían demasiado que ver con la aceptación por la izquierda de la idea de España sino del tema republicano y monárquico, que todavía ahí había mucha división. Yo recuerdo el primer congreso del Partido Socialista que yo tuve el honor de asistir, donde las juventudes socialistas aparecieron con banderas republicanas y ese tema todavía tenía más dificultades en el Partido Socialista que en el Partido Comunista, pero no afectaba a la idea de España. Cuando llegamos a la Constitución, los ponentes de la izquierda estábamos de acuerdo con los ponentes de UCD sobre la idea de España, despojándola de la dimensión religiosa y de la persecución a los heterodoxos naturalmente. Mientras que existía una situación ambigua, exclusivamente en el País Vasco y en Cataluña, donde los elementos que podríamos llamar diferenciadores de esa idea de España estaban muy presentes y que tenían una presencia en el Parlamento con los diputados nacionalistas catalanes y vascos. Había algunos sectores más radicales, no existía Herri Batasuna era Euskadiko Ezquerria la que era radical

entonces, con un diputado que era el señor Letamendía y un senador que era el señor Bandrés, lo cual, como ven ustedes, lo que cambiaron después los tiempos porque al cabo del tiempo Letamendía está retirado de la política y Bandrés, que está muy enfermo, pero acabó, no integrado, pero muy próximo al Partido Socialista de Euskadi. Pero en aquel momento la heterodoxia, desde el punto de vista de la idea de España, eran los nacionalistas democráticos: el Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió.

En esas condiciones hicimos la Constitución. La Constitución sobre el tema de la idea de España tiene un consenso. Hay un acuerdo en el que participan UCD, Alianza Popular, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes. Los únicos que quedan fuera de ese acuerdo son los nacionalistas vascos. ¿Cuáles son los contenidos del acuerdo?, contenidos que se producen no sin dificultades, es decir, que desde el 22 de agosto de 1977 que empezó su trabajo la ponencia hasta el 31 de octubre de 1978 se producen la consolidación de ese consenso, donde se cristaliza cuál es la idea de España que está en la Constitución. Y hay que decir que pese a la amnistía y a que en diciembre de 1976 no existiese ningún preso político en las cárceles españolas, el grupo terrorista ETA que había nacido en los años 60 como excisión de las juventudes nacionalistas y por la situación de represión del franquismo, arrecia su campaña de asesinatos, intentado sobre todo golpear a los militares. En esos momentos los militares son el objetivo porque de lo que se trata es de hacer que los militares salten e interrumpan el proceso de elaboración de la Constitución. Hay algunos momentos especialmente dramáticos cuando se produce un asesinato de algún jefe y el general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno, es zarandeado en el encierro por grupos militares que le zarandean naturalmente militares inferiores a él y por gentes de paisano, lo cual da una idea de lo compleja que era la situación entonces, entonces estábamos siempre temiendo que se produjera el golpe militar. Recuerdo yo que el día 31 de octubre de 1978, cuando estábamos sentados para votar en el Congreso y el Senado el texto definitivo de la Constitución antes del referéndum, teníamos caliente todavía el cadáver del gobernador militar de Madrid y de algunos jefes que habían sido asesinados esa misma mañana con la intención naturalmente de producir desajustes en ese acto muy importante. Es decir que ETA que representaba a una posición anti-española, radical y muy violenta hizo todo lo posible por evitar que se aprobase la Constitución y yo diría, dentro ella, por evitar que se aprobase el modelo de España que está en la Constitución.

Yo creo que ya hemos llegado al momento de decir cuál es el modelo de España que está en la Constitución. Pues, en primer lugar la Constitución establece como sujeto constituyente, como soberano, al pueblo español, es decir, la soberanía reside en el conjunto del pueblo español «del que emanan —dice la Constitución— todos los poderes del estado». Esa, digamos, es la proclamación, pero es una idea de España que ya está, por supuesto, separada de la persecución ideológica, todos los grupos políticos son admitidos, son legales, existen

los derechos y las libertades de tal manera que nadie puede ser perseguido por su ideología o por sus convicciones. Ahí está lo que establece la Constitución y, por consiguiente, no hay nada en esa materia que pueda interferir en una idea de España en la que cabe todo el mundo.

Desde el punto de vista religioso, que era el gran problema que había existido a lo largo de todos los siglos desde los Reyes Católicos, el artículo 16 de la Constitución establece, por supuesto, la libertad ideológica, religiosa y de cultos, establece la prohibición de preguntar por la ideología o por las creencias religiosas y establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal, es decir, establece la idea de un estado laico. Un estado laico no es un estado beligerante contra la iglesia, tal y como se concibe en la Constitución del 78, contra la Iglesia Católica. El laicismo en el siglo XIX, por ejemplo, el de la tercera república francesa, sí había sido beligerante contra la iglesia católica y uno de los signos de que lo que significa simplemente es la neutralidad del estado, el estado es neutral en materia religiosa, pues lo que significa eso se ve con el número 3.º del artículo 16 donde se reconoce que los poderes públicos cooperarán con la iglesia católica y las demás concepciones religiosas. las demás creencias. De tal manera que también aquí se aparta la idea de España que estaba vinculada a la idea de religión, se podía ser naturalmente español y tener una idea de España aunque no se tuviera una creencia religiosa porque estaba respetada la libertad ideológica, religiosa y de cultos, porque las creencias no eran relevantes y no se podía preguntar por ellas y porque ninguna confesión tenía carácter estatal.

Quedaba el tercer problema, el de los hechos diferenciales, es decir, el problema de cómo se hacía compatible esa idea de que el pueblo español era el titular de la soberanía nacional y, por consiguiente, al utilizar la palabra «nacional» al referirse a la soberanía, lo que se dice en la Constitución es que la única nación soberana es la nación española. Ahora, ¿eso supone no reconocer el resto de las realidades, de los hechos diferenciales?. al contrario. La Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Nacionalidad y nación son dos términos sinónimos. Ya había escrito en el siglo XIX Pi i Margall un libro «Sobre el principio de las nacionalidades» y esa era también una posición del romanticismo político donde era identificable, al menos desde la concepción de los constituyentes, nacionalidad con nación. Cuando la Constitución reconoce la existencia de hechos diferenciales nacionales en el interior de España, lo que estamos reconociendo es la existencia de unas naciones culturales, con cultura y lengua propia, que no se identifican plenamente con la idea de nación española pero que tampoco están al margen de ella. Es decir, lo que hace la Constitución es excluir los dos tipos de nacionalismo que no son compatibles con esto que les acabo de decir. Se excluye un nacionalismo español como podía ser el del franquismo de otros momentos que consideraba incompatible la idea de España con la existencia en su interior de hechos diferenciales culturales, lingüísticos, etc. Ese nacionalismo español está excluido de la Constitución. Y también está excluido el nacionalismo periférico

que no acepta que está inserto en una nación más amplia que es la nación España. Esos dos nacionalismos que yo he llamado hace unos años «excluyentes» pero que me da un poco de preocupación utilizar ese término porque lo utiliza todos los días el señor presidente del Gobierno, lo de los nacionalismos excluyentes, eso se completa con la idea que yo tengo, por halago de la fortuna, el honor de ser el primero que lo pronuncie en el Parlamento de definir a España como una *nación de naciones y de regiones*. Es decir, que es una realidad nacional, es inconcebible que algunas personas nieguen la existencia de la nación España que es muy vieja pero, al mismo tiempo, aceptamos, y ese es el modelo constitucional, que dentro de España hay otras naciones culturales, que no son soberanas porque la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.

Ese es el primer paso de la idea de España y eso tiene una repercusión en el tema de las lenguas y el artículo 3.º de la Constitución Española es un artículo enormemente cuidado que, por consiguiente, permite, a mi juicio, afirmar claramente que algunos de los desarrollos lingüísticos posteriores son claramente inconstitucionales. Porque el artículo 3.º dice «el castellano es la lengua española oficial del estado, las demás lenguas españolas serán igualmente oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». Luego hay un tercer párrafo que se refiere a las modalidades lingüísticas como puede ser el castúo, el panocho o el bable, que no tienen consideración de lenguas y se dice que se protegerán esas modalidades lingüísticas. Pero la clave es la afirmación de que el castellano es la lengua española oficial del estado y la afirmación, que es abarcadora e integradora, de que las demás lenguas españolas son igualmente oficiales en sus comunidades autónomas. ¿Qué es lo que establece pues la Constitución en esta materia para significar también esta integración?: el bilingüismo. El bilingüismo, que será después, digamos, empezado a perturbar y a desviarse con un concepto que se introduce en el estatuto de autonomía de Cataluña y Vasco que es el concepto de lengua propia, cuando se dice que el catalán es la lengua propia de Cataluña y que el castellano es igualmente lengua oficial. Ahí se da, de alguna manera, la vuelta a lo que había dicho la Constitución y eso ha producido después algunos problemas que no son insuperables, pero que ha llevado a hechos insólitos como que, por ejemplo, la universidad de Tarragona haya dicho que su única lengua oficial es el catalán.

Estamos en el modelo constitucional, no en lo que pasa después. Nosotros pensamos que el reconocer el hecho diferencial no debía agotar la autonomía. Nosotros habíamos contemplado como la Constitución de 1876 era centralista que había impulsado el nacionalismo y como la de 1931 que se centraba solamente en la autonomía de los hechos diferenciales había producido desajustes y una de las causas de la Guerra Civil, quizá no la más importante, pero una de las causas de la guerra, había sido el agravio que otras provincias habían sentido por esa especie de privilegio.

Entonces ¿qué hicimos? Después de esas afirmaciones iniciales para reconducir el problema de los nacionalistas, fue generalizar el proceso autonómico y la Constitución hace eso y establece un modelo de estado, el estado de las autonomías, que es un estado funcionalmente federal, que lo único que tiene que hacer es potenciar sus mecanismos federales posteriormente. Pero si ustedes observan la Constitución no hay ni una sola norma que dé una ventaja a las comunidades autónomas con hecho diferencial. Naturalmente les da ventaja en el hecho diferencial, es decir, si se protege la lengua catalana o la gallega o la vasca es porque hay estas lenguas, no se protege nada similar en Albacete, por ejemplo, o en Badajoz o en Madrid, porque no hay más lengua que el castellano. Se protegerán luego las modalidades lingüísticas: el castuío, o el pancho en Murcia pero no tiene el mismo nivel de protección. Solamente hay los hechos diferenciales lingüísticos y las identidades históricas que se reconocen en relación con el País Vasco y con Navarra en cuanto a sus sistemas fiscales, esas son las diferencias. Por cierto, diferencias las fiscales que tienen, y les auguro muy mal porvenir, en el progreso de la UE pero ese es otro problema. Saben ustedes que los vascos están ahora enormemente preocupados porque en el Tribunal de Luxemburgo está presente su caso y la posibilidad de que pueda existir un privilegio fiscal como el que existe en el interior de la UE. Pero ahora volveré porque eso tiene que ver con el esfuerzo que hicimos por incorporar a los nacionalistas vascos al modelo.

Entonces, el proceso, salvo eso, no hay ni un solo hecho que permita establecer privilegios y el único privilegio es el del acceso a la autonomía, se facilita el acceso de aquellas comunidades que hubieran tenido con anterioridad o que hubieran estado en trámite de tener un estatuto de autonomía. Eso estaba pensado para Cataluña, el País Vasco y Euskadi que eran las naciones en el interior de la nación España. Pero incluso ese tema se sitúa en una disposición transitoria, lo cual significa que no se le quería dar ninguna trascendencia de perdurabilidad y luego se establece que aquellas otras comunidades autónomas que cumplieran el requisito de aprobar un referéndum podrían tener en el trámite más o menos rápido o lento de insertarse en el sector más rápido, aunque no fueran esas comunidades autónomas. Y eso es lo que pasa con Andalucía. Andalucía tiene el estatuto de autonomía del mismo nivel que las tres comunidades con hechos diferenciales porque se ha producido un referéndum en esa materia.

Ese es el panorama de la Constitución en el ámbito al que me refiero y solamente hacerles a ustedes una última observación antes de terminar con el tema vasco, al que me refería hace un momento. Y es que no hay un solo artículo en la Constitución que permita a nadie afirmar coherentemente –se puede decir en un mitin político, pero algo que no resiste un análisis entre juristas– que los hechos diferenciales tienen una superioridad sobre aquellas comunidades que no los tienen en temas distintos de los del propio hecho diferencial. Naturalmente cuando uno tiene una lengua o una cultura esa lengua o

esa cultura están protegidas y eso es algo que diferencia algo que diferencia a las comunidades que tienen lengua y una cultura distinta a la general, pero nada más, en otras materias no hay ningún elemento que permita decir que tienen que tener una superioridad ni en transportes, ni en comunicaciones, ni en sanidad, ni en ningún tema que sea diferente que el tema propio del hecho diferencial. Ese esquema es aceptado plenamente por los nacionalistas catalanes. Estos participan plenamente de esa aceptación, de ese consenso y yo les recomiendo a ustedes, si quieren, que vean los cuatro tomos que publica el Congreso de los Diputados sobre los debates constitucionales donde verán la manera tajante y clara del apoyo de los nacionalistas catalanes al modelo de Constitución, con palabras tajantes de Jordi Pujol, del señor Roca, etc.

Sin embargo, no conseguimos el mismo resultado con los nacionalistas vascos. Estos intervienen en el debate constitucional, es falso lo que se dice de que se les marginó, no están en la ponencia constitucional porque no puede estar todo el mundo, y Roca representa al grupo parlamentario que inicialmente era un grupo vasco-catalán, pero bien es verdad que al mes de ser representante se separaron y dijo que él no podía representar a un grupo que estaba tan absolutamente enloquecido en sus planteamientos, entonces Roca deja de representar a los nacionalistas vascos pero seguimos haciendo grandes esfuerzos por integrarlos dentro del proceso. Y cuando llega la Constitución, con todos estos planteamientos que les he hecho a ustedes, cuando llega el debate en la Comisión del Congreso de los Diputados y empiezan las negociaciones nocturnas para ajustar el consenso, donde trabajábamos por la mañana, dormíamos un poquito por la tarde y por la noche, a veces de 10 de la noche a 6 de la mañana, estábamos perfilando lo que se iba a discutir después. En esas conversaciones donde está todo el mundo presente y solamente están al margen esos grupúsculos, como algunos senadores de extrema derecha o algún senador peculiar como el senador Silinach y el grupo entonces de Euskadiko Ezquerria, están también los nacionalistas vascos, hasta el punto y hora que —yo lo he contado alguna vez— una noche que estábamos reunidos precisamente en el que era entonces mi despacho, en la calle Conde Xiquena, número 13, de repente Fernando Abril Martorell —que en paz descansa, persona, por cierto, extraordinaria a la que me gusta recordar con admiración y con cariño— que era muy fumador, sale al balcón a fumarse un cigarrillo y entonces flashes por todos los lados porque estaban los periodistas abajo esperando porque les gustaba mirar dónde se reunían y qué pasaba y quién estaba. Entonces el señor Arzallus que estaba presente, descubierto y pensando que la prensa iba a saber que él estaba participando en las negociaciones, decidió quedarse, salimos todos y él se quedó a dormir —o a lo que fuera— en mi despacho por la noche hasta el día siguiente, que salió coincidiendo con una señora piadosa de una planta superior que venía de misa y que creo que se llevó un susto grandísimo cuando se encontró un señor en el portal a las siete de la mañana que salía. Quiero decir que estaban presentes en todas las negociaciones y establecimos algunos artículos exclusivamente para

que los nacionalistas vascos también estuvieran de acuerdo con el consenso donde estaba implicada esa idea de España que les acabo de explicar. Hicimos dos artículos, tres diría yo, pero dos principalmente que no hubieran estado en la Constitución si no hubiera sido para dar una satisfacción a los nacionalistas vascos. Primero el reconocimiento de los derechos históricos, que está en la disposición adicional, que se deja muy claramente en la Constitución dicho que se podrán actualizar en el marco de la Constitución. O sea que la actualización de los derechos históricos —que yo realmente, si les confieso a ustedes, no sé muy bien lo que son— se hicieron para acercar a los nacionalistas vascos, pero se dejó muy claro que era en el marco de la Constitución. Y luego el artículo 150.2 que permite transferir o delegar competencias estatales a las comunidades autónomas siempre que por su naturaleza sean transferibles o delegables por medio de una ley orgánica. Eso son dos normas que están en la Constitución solamente para conseguir que los nacionalistas vascos estuvieran dentro del esquema del consenso.

No se consiguió y, como saben ustedes, durante el referéndum los nacionalistas vascos recomendaron la abstención. El día 6 de diciembre, en torno a un 70 por 100 del censo votó a favor, hubo un número pequeño de votos en contra y hubo una abstención de un 25 a un 30 por 100, que es normal. En el País Vasco la abstención subió, pero en Álava el número de votantes superó al 50 por 100 y fue inferior —en torno a algo más del 40 por 100— en Guipúzcoa y en Vizcaya. Pero entre los votantes la inmensa mayoría votaron SÍ, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya como en Álava en esta con una participación superior al 50 por 100. Naturalmente ahí el tema que estaba en juego sobre todo no eran los derechos fundamentales que eran irreprochables, no era la Corona, no era la organización de la separación de poderes, no eran las leyes orgánicas, era la idea de España, ese era el tema que estaba presente en su planteamiento. Pero los nacionalistas vascos han afirmado siempre, y es oportuno recordarlo ahora, que el País Vasco no había votado favorablemente a la Constitución y no lo habían hecho porque no coincidían con la idea de España. Eso es falso y yo siempre digo que el argumento a utilizar es un argumento nacionalista vasco precisamente.

Durante la elaboración, durante el debate y durante el referéndum para el Estatuto de Autonomía del País Vasco en la segunda República ocurrió justamente al revés: se aprobó en referéndum el estatuto en Guipúzcoa y en Vizcaya y no se aprobó porque el número de abstenciones superó el 50 por 100 en Álava, territorio histórico que es, basta con que ustedes vayan a la Diputación Provincial de Álava para que vean la vinculación de Álava con la Corona de Castilla. Y por eso no estaba entonces a favor del Estatuto y estaba en el 78 a favor de la Constitución. Entonces la derecha española, contraria al estatuto de autonomía durante la República, utilizó el argumento de que al haber más del 50 por 100 de abstenciones en Álava no se podía considerar aprobable el Estatuto y José Antonio Aguirre, que era lehendakari del gobierno vasco durante

la República, hizo una intervención en las Cortes en las cuales él justificó, él decía que en Democracia la abstención no cuenta y tenía toda la razón, cuenta la abstención para valorar políticamente pero no se podía decir que no se había aprobado el texto porque había habido muchos más votos a favor que en contra. Bastaría, por consiguiente, con aplicar el criterio de Aguirre durante la República a la Constitución del 78 para afirmar que los vascos habían votado a favor del proyecto de Constitución. Pero es que además inmediatamente, y trayendo causa de la Constitución, se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco que está apoyado masivamente por el PNV y por los votantes vascos en una gran mayoría. Sobre todo los juristas que veo por aquí saben que un estatuto de autonomía, dentro de la jerarquía de las normas, depende de la Constitución y, por consiguiente, que al votar el estatuto que depende de la Constitución se está también aceptando ésta. Pero es que además durante estos veinte años el pueblo vasco, con esa idea de España dentro de la Constitución, se ha estado autodeterminando, votando, protestando, planteando recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional, institución que surge por la Constitución. Es decir, que lo que llamamos los juristas «eficacia de la Constitución» ha sido reconocida al aplicarla y al aceptarla por los propios nacionalistas vascos.

Yo con esto ya voy a terminar. Solamente les diré a ustedes una cosa. ETA intentó, durante la elaboración de la Constitución, reventarla matando. Evidentemente no podemos aceptar que por dejar de matar vuelva a reventar la Constitución. No es políticamente decente que se obtengan ventajas políticas por hacer lo que es simplemente una obligación moral: abandonar la violencia.